

Crecimiento, crisis hídrica y regulación: la agenda sostenible que espera al nuevo gobierno

La administración de José Antonio Kast arriba con una agenda proinversión y crítica de la permisología, pero deberá enfrentar una batería de urgencias ambientales que van desde la escasez de agua y la descarbonización hasta los conflictos territoriales y la basura. Académicos, expertos y el mundo productivo de Valparaíso detallan los desafíos a partir de la realidad de nuestra zona.



Marcelo Contreras C.

La hoja de ruta programática que llevó a José Antonio Kast a La Moneda ordena las prioridades del próximo gobierno en torno a tres “emergencias” -seguridad, social y económica-, y es dentro de este último eje donde se ubican las referencias a los desafíos ambientales. El documento oficial, alojado en el Servicio Electoral, plasma su diagnóstico y propuestas en torno a agua, energía y gestión ambiental dentro del marco general de crecimiento y facilitación de inversiones, pero carece de un capítulo dedicado exclusivamente al medioambiente o a la crisis climática, tal como lo entienden los expertos en sostenibilidad.

En términos generales, la nueva administración propone impulsar una mayor eficiencia en la tramitación de permisos ambientales -incluyendo la modificación de guías e instructivos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- con el objetivo de devolver “certeza jurídica a todos los actores”, al tiempo que se fortalece la institucionalidad ambiental para priorizar el cumplimiento y la eficacia regulatoria. Si bien el programa menciona conceptos como hidrógeno verde y crisis hídrica, el uso de términos vinculados a Cambio Climático y biodiversidad resulta marginal y no se estructura un plan de acción concreto con metas y plazos explícitos.

En ese marco, el próximo gobierno enfrentará una agenda ambiental que no depende solo de definiciones ideológicas, sino de restricciones físicas, territoriales y sociales que ya están instaladas. La Región de Valparaíso es un laboratorio avanzado de esas tensiones: escasez hídrica, saturación industrial, transición energética, conflictos territoriales y presión por inversión conviven en un espacio reducido, obligando a decisiones que no admiten soluciones simplistas.

SISTEMA “KAFKIANO”

Uno de los ejes más complejos del escenario inmediato es la convivencia entre pasivos ambientales acumulados y nuevos procesos de transición productiva. La directora de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (Upla), Gabriela Gallardo, advierte que “uno de los desafíos más relevantes en la región de Valparaíso será la de enfrentar situaciones y/o conflictos socioambientales que se experimentan en la zona como por ejemplo la contaminación atmosférica, de agua y suelo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”. A ello se suma “el proceso de transición justa por el cierre de la fundición de Codelco Ventanas, lo cual también deberá ser analizado”. En paralelo, Gallardo señala que “el norte de nuestro país es un polo que puede y debe

seguir explorando energías renovables, especialmente aquellas no convencionales, así como también evaluar constantemente los procesos de desalinización tanto para usos industriales, mineros así como para consumo humano”.

Desde su mirada, cualquier modificación al marco regulatorio tendrá impactos directos en territorios frágiles. “La flexibilidad dependerá de dónde sea aplicada (...) Si hablamos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) puede afectar o impactar en la aprobación (o no) de proyectos (...) siempre y cuando la regulación sea modificada y no deje espacio a subjetividades”, explica. Y añade que, en zonas saturadas o latentes por contaminación, “cualquier tipo de flexibilidad dentro de la regulación en materia de medio ambiente podría afectar directamente a la ciudadanía que vive en aquellos territorios”, recordando además que rige el principio de no retroceso ambiental.

Una mirada complementaria proviene de la fundación Piensa. Para su director ejecutivo, Juan Pablo Rodríguez, el problema central no es la existencia de parámetros y resguardos, sino su mala arquitectura institucional. “El principal desafío es cambiar el equilibrio: se requieren estándares exigentes, pero decisiones previsibles y oportunas. La necesaria protección ambiental no puede terminar siendo, por mal diseño institucional, una fábrica de frustración ciudadana, inversión congelada y conflicto permanente”, afirma.



En esa línea, Rodríguez sostiene que la tensión entre crecimiento y protección suele ser "un falso dilema" cuando las reglas son borrosas, porque se termina sin inversión ni buena protección. "Lo kafkiano del sistema hace que el interesado esté más preocupado de la permisología eterna que de gestionar eficazmente los impactos relevantes", afirma.

El ejecutivo identifica focos de conflicto en infraestructura estratégica como puertos, ferrocarriles, vivienda o minería, y propone una regulación "clara, exigente y predecible", donde se definan tempranamente criterios, actores y plazos. En agua, plantea que "la seguridad hídrica es una prioridad para el país" y que se requiere infraestructura -embalses, desalación, reutilización- junto con protección de cuencas y fortalecimiento técnico de la Dirección General de Aguas. En energía, defiende un sistema "diversificado, robusto y predecible", bajo el principio de neutralidad tecnológica.

Desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena sitúa los desafíos en tres grandes frentes: aire, agua y residuos. "Lo que queda pendiente es la implementación del plan de descontaminación y la aplicación de la nueva norma de calidad de aire (...) Va a ser fundamental acelerar el trámite y así realmente rebajar la mortalidad prematura", afirma. A ello suma la urgencia de normas de calidad de agua frente al aumento de eventos de algas por mayor temperatura y nutrientes, y el problema estructural de la basura: "Muchos rellenos sanitarios están terminando su vida útil incluyendo la región de Valparaíso (...) y por tanto va a ser fundamental enfrentar el flagelo de la basura dentro de esta próxima administración".

Sobre la capacidad del Estado, Mena observa que el país está mejor preparado en crisis hídrica tras la reforma al CÓ-



digo de Aguas, que permite priorizar usos esenciales. Y agrega que el cambio climático no es sólo un imperativo moral, sino "un imperativo también económico y social, entendiendo que el cambio climático erosiona los avances del crecimiento económico y multiplica las inequidades". En su análisis, los gobiernos de derecha tienden a usar instrumentos económicos más que normativas de comando y control, dentro de un marco legal que ya impone obligaciones climáticas a las empresas.

Desde el mundo productivo regional, la Asociación de

Empresas Región de Valparaíso (ASIVA) sitúa el debate en términos de gobernanza. Su presidente, Alfonso Salinas, afirma que en Quintero-Puchuncaví "el desafío no es castigar la actividad industrial, sino ordenar mejor la gestión ambiental, eliminar duplicidades (...) y avanzar hacia esquemas colaborativos, eficaces y creíbles". En agua, destaca la oportunidad de la desalación para avanzar hacia una gestión integrada de cuencas, y en Cambio Climático pone énfasis en una implementación técnica de la nueva institucionalidad de biodiversidad que permita prevenir incendios sin generar más burocracia.

Respecto del SEIA, Salinas es directo: "el problema no es que el sistema incorpore exigencias ambientales (...) el problema es que no está siendo suficientemente eficiente ni focalizado". Cita proyectos como Maratué o Las Salinas, entrampados por largos procesos y judicialización, y sostiene que se requiere avanzar hacia evaluaciones proporcionales, focalizadas y con plazos claros. "Compatibilizar crecimiento y medio ambiente exige reglas claras, estándares exigentes, decisiones oportunas y un Estado que funcione mejor", concluye. ■



"El principal desafío es cambiar el equilibrio: se requieren estándares exigentes, pero decisiones previsibles y oportunas. La necesaria protección ambiental no puede terminar siendo, por mal diseño institucional, una fábrica de frustración ciudadana, inversión congelada y conflicto permanente".

Juan Pablo Rodríguez
 Director Ejecutivo
 Fundación Piensa